

INE/CG719/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN Y DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

VISTO, para resolver el expediente **INE/P-COF-UTF/9/2022/NL**.

A N T E C E D E N T E S

I. Determinación por parte de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. El catorce de julio de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la Resolución INE/CG720/2021, a través de la cual se desechó el escrito de queja presentado por el C. Juan José Aguilar Garnica, en calidad de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, por el que denuncia al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León, y al partido político Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Nuevo León; lo anterior en razón de que la autoridad que debía pronunciarse en un primer momento sobre la existencia de las publicaciones realizadas en favor del entonces candidato a Gobernador de Nuevo León el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda durante el periodo de veda electoral era la autoridad electoral local. Por ello, a través del resolutivo SEGUNDO se mandató dar vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León para que se pronunciara al respecto, y una vez resuelto lo anterior remitiera la información para que esta autoridad estuviera en aras de pronunciarse conforme a derecho corresponda.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

En razón de lo anterior, el quince de febrero de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio SE/CEE/175/2022 de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, mediante el cual remite la resolución al expediente PES-895/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que determinó como existente la infracción atribuida al C. Félix Arratia Cruz, Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, por la difusión de propaganda electoral en época de veda electoral consistente en diversas publicaciones en la red social Facebook las cuales tenían posicionamientos políticos en contra del otrora candidato a Gobernador de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Adrián de la Garza Santos y a favor del otrora candidato a Gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento ciudadano, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda. (Fojas 01 a la 19 del expediente)

II. Inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitido a trámite y sustanciación el procedimiento oficioso mencionado y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/P-COF-UTF/9/2021/NL**, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, publicar el acuerdo y cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos señalados como probables responsables. (Fojas 20 a la 21 el expediente)

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

a) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 22 a la 24 del expediente)

b) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 25 a la 26 del expediente)

IV. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de febrero dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3063/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso de mérito. (Fojas 27 a la 30 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de febrero dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3064/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso de mérito. (Fojas 31 a la 34 del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso y emplazamiento al partido Movimiento Ciudadano.

a) El diecisiete de febrero dos mil veintidós, por medio del Sistema Integral de Fiscalización y mediante oficio INE/UTF/DRN/3065/2021 se notificó al representante de finanzas de Movimiento Ciudadano a efecto de notificar al sujeto incoado, el inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 35 a la 44 del expediente)

b) El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito identificado MC-INE-081/2022, el Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 45 a la 53 del expediente)

“(…)

*Una vez que esta representación analizó su contenido, es dable asegurar que de las mismas, se desprende de forma clara, que nos encontramos ante dos publicaciones que se alojaron ante la red social conocida como Facebook, en una cuenta personal del C. Félix Arratia Cruz, en su carácter de ciudadano mexicano, ejerciendo la libertad de expresión a que se tiene derecho en un sistema democrático como lo es el nuestro; **que no se alojaron en las redes sociales institucionales de Movimiento Ciudadano ni a nivel federal y/o local y mucho menos en las del otrora candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda.***

Por lo tanto, nos encontramos ante publicaciones personales y espontaneas del C. Félix Arratia Cruz, que no formaron parte de la campaña electoral, ni de forma directa o indirecta, sino que se trata, de una apreciación personal del ciudadano Félix Arratia Cruz, que al encontrarse en una página personal y no de empresa, institución, organización o partido político, adicional a que no se trata de una publicidad pagada, por lo que las personas solo pudieron tener acceso a la misma de forma volitiva, por lo tanto, se deben de considerar personales y bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión de quien las emite y sujetas al tratamiento que se le debe dar a la información alojada en redes sociales o plataformas digitales.

Así las cosas, es importante destacar que la libertad de expresión constituye un componente consustancial de todo régimen democrático, en tanto protege el derecho de cada persona a expresar y difundir los pensamientos propios, ideas y conceptualizaciones, al propio tiempo que hace factible que la sociedad este en aptitud de procurar y recibir cualquier tipo de información que posibilite su participación activa en asuntos de relevancia pública.

*De esta forma lo ha afirmado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP506/2015, SRE-PSC-251/2015, cuyo contenido se aborda también más adelante, donde se establece que el propósito fundamental de la libertad de expresión incluye tanto la autorrealización individual, como la preservación del sistema democrático y del derecho colectivo a decidir sobre cuestiones de interés público. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (dimensión social o colectiva). Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura también, el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden (**Jurisprudencia P./J. 25/2007**).*

Al respecto, conviene señalar que, por cuanto hace a la dimensión individual, la libertad de expresión implica, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, por tanto, se entiende que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción

de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma medida, un límite al propio derecho de expresarse libremente; por otra parte, en relación a la dimensión social, se ha entendido que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, que comprende el derecho de externar y comunicar diversos puntos de vista (dimensión individual), pero que implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias.

(...)

De las resoluciones antes mencionadas se desprende que se debe de privilegiar la libertad de expresión de Félix Arriata Cruz, contenida en sus publicaciones, ya que lo hizo en su calidad de ciudadano y en su cuenta personal de Facebook.

Que no existió dicho contenido en páginas de Movimiento Ciudadano o el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, quienes cumplieron cabalmente con el periodo de veda, que no dan elementos que conlleven a señalar que existió consentimiento de las publicaciones denunciadas, que tampoco las y los candidatos y partidos políticos pueden estar permanentemente, es decir todo el tiempo, revisando las redes sociales de las personas físicas para saber si hay publicaciones de las cuales deben de estarse deslinando, lo que resulta materialmente imposible por sus dimensiones y complejidades.

Por lo que consideramos de forma respetuosa pero categórica, que las publicaciones señaladas no son ni fueron responsabilidad de Movimiento Ciudadano, ni de Samuel Alejandro García Sepúlveda, que con las mismas no se generó ningún beneficio a favor de la campaña, que no pueden determinarse como aportación de ente prohibido, ya que no existió solicitud, orden, pedimento o contrato alguna por dichas publicaciones; consecuentemente, NO EXISTIÓ VIOLACIÓN ALGUNA EN PERIODO DE VEDA, NI BENEFICIO ALGUNO DE LAS PUBLICACIONES DENUNCIADAS, a favor de Movimiento Ciudadano y del Ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Reiterando, insistimos, sobre la imposibilidad formal y material de la presentación de un deslinde, puesto que en el caso se trata de una página personal de Facebook, a la que solo tuvieron acceso las personas a las que les interesó conocer sobre las publicaciones del C. Félix Arriata, es decir sus contactos, amigos de dicha red social; que al tratarse de días de veda electoral, tanto Movimiento Ciudadano como el otrora candidato, nos encontrábamos en preparación de la jornada electoral, así como terminar de recopilar y presentar en tiempo y forma los gastos que se generaron en la campaña ante el SIF, el retiro de propaganda, variadas acciones por ejecutar que se encuentran en la ley y que son del conocimiento de esa autoridad.

Conclusiones.

1.- Las publicaciones señaladas fueron a título personal ejerciendo el derecho a libertad de expresión.

2.- No existió aprobación de las publicaciones por parte de Movimiento Ciudadano, ni de Samuel Alejandro García Sepúlveda.

3. – No existe elemento alguno que acredite que las publicaciones puedan constituirse como apartación de ente prohibido.

(...)

VII. Notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso y emplazamiento al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda otrora Candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León.

a) El tres de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0344/2022, la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda otrora Candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 60 a la 75 del expediente)

b) El nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número de oficio, el al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, dio respuesta al emplazamiento en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 76 a la 83 del expediente)

“(...)

*Una vez que esta representación analizó su contenido, es dable asegurar que de las mismas, se desprende de forma clara, que nos encontramos ante dos publicaciones que se alojaron ante la red social conocida como Facebook, en una cuenta personal del C. Félix Arratia Cruz, en su carácter de ciudadano mexicano, ejerciendo la libertad de expresión a que se tiene derecho en un sistema democrático como lo es el nuestro; **que no se alojaron en las redes sociales institucionales de Movimiento Ciudadano ni a nivel federal y/o local y mucho menos en las del otrora candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda.***

Por lo tanto, nos encontramos ante publicaciones personales y espontaneas del C. Félix Arratia Cruz, que no formaron parte de la campaña electoral, ni de forma directa o indirecta, sino que se trata, de una apreciación personal del ciudadano Félix Arratia Cruz, que al encontrarse en una página personal y no de empresa, institución, organización o partido político, adicional a que no se trata de una publicidad pagada, por lo que las personas solo pudieron tener acceso a la misma de forma volitiva, por lo tanto, se deben de considerar personales y bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión de quien las emite y sujetas al tratamiento que se le debe dar a la información alojada en redes sociales o plataformas digitales.

Así las cosas, es importante destacar que la libertad de expresión constituye un componente consustancial de todo régimen democrático, en tanto protege el derecho de cada persona a expresar y difundir los pensamientos propios, ideas y conceptualizaciones, al propio tiempo que hace factible que la sociedad este en aptitud de procurar y recibir cualquier tipo de información que posibilite su participación activa en asuntos de relevancia pública.

*De esta forma lo ha afirmado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias dictadas en los expedientes SUP-REP506/2015, SRE-PSC-251/2015, cuyo contenido se aborda también más adelante, donde se establece que el propósito fundamental de la libertad de expresión incluye tanto la autorrealización individual, como la preservación del sistema democrático y del derecho colectivo a decidir sobre cuestiones de interés público. En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (dimensión social o colectiva). Así, al garantizarse la seguridad de no ser víctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía de la libertad de expresión asegura también, el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva del ejercicio de este derecho. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden (**Jurisprudencia P./J. 25/2007**).*

Al respecto, conviene señalar que, por cuanto hace a la dimensión individual, la libertad de expresión implica, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, por tanto, se entiende que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma

medida, un límite al propio derecho de expresarse libremente; por otra parte, en relación a la dimensión social, se ha entendido que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas, que comprende el derecho de externar y comunicar diversos puntos de vista (dimensión individual), pero que implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias.

(...)

De las resoluciones antes mencionadas se desprende que se debe de privilegiar la libertad de expresión de Félix Arriata Cruz, contenida en sus publicaciones, ya que lo hizo en su calidad de ciudadano y en su cuenta personal de Facebook.

Que no existió dicho contenido en páginas de Movimiento Ciudadano o el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, quienes cumplieron cabalmente con el periodo de veda, que no dan elementos que conlleven a señalar que existió consentimiento de las publicaciones denunciadas, que tampoco las y los candidatos y partidos políticos pueden estar permanentemente, es decir todo el tiempo, revisando las redes sociales de las personas físicas para saber si hay publicaciones de las cuales deben de estarse deslinando, lo que resulta materialmente imposible por sus dimensiones y complejidades.

Por lo que consideramos de forma respetuosa pero categórica, que las publicaciones señaladas no son ni fueron responsabilidad de Movimiento Ciudadano, ni de Samuel Alejandro García Sepúlveda, que con las mismas no se generó ningún beneficio a favor de la campaña, que no pueden determinarse como aportación de ente prohibido, ya que no existió solicitud, orden, pedimento o contrato alguna por dichas publicaciones; consecuentemente, NO EXISTIO VIOLACIÓN ALGUNA EN PERIODO DE VEDA, NI BENEFICIO ALGUNO DE LAS PUBLICACIONES DENUNCIADAS, a favor de Movimiento Ciudadano y del Ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Así mismo, de dichas publicaciones se desprende que fue un acto espontáneo, de carácter meramente personal y no hubo participación ni mucho menos beneficio por parte del suscrito SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA.

Reiterando, insistimos, sobre la imposibilidad formal y material de la presentación de un deslinde, puesto que en el caso se trata de una página personal de Facebook, a la que solo tuvieron acceso las personas a las que les interesó conocer sobre las publicaciones del C. Félix Arriata, es decir sus contactos, amigos de dicha red socia; que al tratarse de días de veda electoral, tanto Movimiento Ciudadano como el otrora candidato, nos encontrábamos en preparación de la jornada electoral, así como terminar de recopilar y presentar

en tiempo y forma los gastos que se generaron en la campaña ante el SIF, el retiro de propaganda, variadas acciones por ejecutar que se encuentran en la ley y que son del conocimiento de esa autoridad.

Conclusiones.

1.- Las publicaciones señaladas fueron a título personal ejerciendo el derecho a libertad de expresión.

2.- No existió aprobación de las publicaciones por parte de Movimiento Ciudadano, ni de Samuel Alejandro García Sepúlveda.

3. – No existe elemento alguno que acredite que las publicaciones puedan constituirse como apartación de ente prohibido.

(...)”

VIII. Requerimiento de Información y documentación a la empresa Meta Platforms, INC.

a) El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/5628/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el requerimiento de información en relación con el procedimiento de mérito. (Fojas 84 a la 87 del expediente)

b) El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, la empresa mencionada, dio respuesta al requerimiento de información señalando el costo pagado por las publicaciones del C. Félix Arratia Cruz. (Fojas 88 a la 90 del expediente)

c) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15343/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el requerimiento de información en relación con la ampliación del objeto de una publicación más al procedimiento de mérito.

d) El diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15564/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó un alcance al requerimiento de información del inciso anterior.

e) El tres de agosto de dos mil veintidós, a través de correo electrónico, la empresa mencionada, dio respuesta al requerimiento de información señalando el costo pagado por la publicación señalada en el perfil del C. Félix Arratia Cruz.

IX. Razón y constancia.

a) El once de marzo de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia de la inspección ocular realizada a la plataforma de Meta en su sección de biblioteca de anuncios esta autoridad electoral pudo constatar que se encontraron las publicaciones denunciadas y pagadas por el C. Félix Arratia Cruz. (Fojas 91 a la 93 del expediente)

b) El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó constancia del correo electrónico y de la información remitida por la empresa Meta Platforms, INC. en relación con el costo de las publicaciones del C. Félix Arratia Cruz a través de la plataforma de Facebook. (Fojas 94 a la 95 del expediente)

c) El primero de julio de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia de la inspección ocular realizada a la plataforma de Meta en su sección de biblioteca de anuncios esta autoridad electoral pudo constatar una publicación similar a la denunciada en el perfil del C. Félix Arratia Cruz.

b) El ocho de agosto de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió hacer constancia del correo electrónico y de la información remitida por la empresa Meta Platforms, INC. en relación con el costo de la publicación que fue parte de la ampliación del objeto similar a la denunciada del C. Félix Arratia Cruz a través de la plataforma de Facebook.

e) Se levantó razón y constancia de la inspección ocular realizada al portal electrónico de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, esta autoridad electoral pudo constatar en el directorio de partidos políticos al que el C. Félix Guadalupe Arratia Cruz tiene la calidad de representante suplente del partido Movimiento Ciudadano ante esa autoridad.

X. Acuerdo de Alegatos.

Mediante acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL. (Foja 96 del expediente)

Notificación al partido Movimiento Ciudadano.

a) El diez de mayo de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/12124/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL. (Fojas 97 a la 99 del expediente)

b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.

Notificación al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda otrora Candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León.

a) El diez de mayo de dos mil veintidós, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital y/o Local de Nuevo León a efecto de que notificara al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL. (Fojas 114 a la 116 del expediente)

b) El trece de mayo de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/VE/JLE/NL/0852/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL. (Fojas 117 a la 126 del expediente)

c) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.

XI. Ampliación del plazo de sustanciación. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se acordó ampliar el plazo para presentar el proyecto de Resolución del procedimiento de mérito. (Foja 127 del expediente)

XII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/12579/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del procedimiento de mérito. (Fojas 128 a la 131 del expediente)

XIII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio

INE/UTF/DRN/12760/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la ampliación del procedimiento de mérito. (Fojas 132 a la 135 del expediente)

XIV. Acuerdo de ampliación de objeto de investigación. El veintisiete de junio de dos mil veintidós la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el objeto de investigación en el procedimiento de mérito, toda vez que tras haber efectuado diversas diligencias de investigación y del análisis realizado a las mismas, se desprenden elementos derivados de la sustanciación del procedimiento de mérito, del cual se pudo constatar en la biblioteca de anuncios de la red social Facebook, específicamente en el perfil del C. Félix Arratia Cruz, la existencia de una publicación pautada (id. 3888582361254618) que guarda identidad con una de las publicaciones (id. 158182282949033) que forman parte de la vista que dio inicio al presente procedimiento, lo que podría constituir un ilícito sancionable en materia de fiscalización pues tanto las publicaciones aquí descritas como aquellas que fueron materia de la vista, podrían configurar ingresos no reportados por concepto de aportación del C. Félix Arratia Cruz, a favor del partido Movimiento Ciudadano respecto de su otrora candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, C. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

XV. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación del objeto de investigación.

a) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación del objeto de investigación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.

b) El treinta de junio de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de ampliación del objeto de investigación, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.

XVI. Notificación y Emplazamiento de ampliación de objeto de investigación al Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14597/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la ampliación de objeto de investigación del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

b) El cuatro de julio de dos mil veintidós se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización mediante escrito MC-INE-236/2022 signado por el Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento formulado.

XVII. Notificación y Emplazamiento de ampliación de objeto de investigación al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda otrora Candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León.

a) El veintisiete de junio dos mil veintidós, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital y/o Local de Nuevo León a efecto de que notificara al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, la ampliación de objeto de investigación del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

b) El veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/VE/JLE/NL/1109/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la ampliación de objeto de investigación del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

c) A la fecha del presente no ha presentado respuesta al emplazamiento formulado.

XVIII Acuerdo de alegatos. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

Notificación al partido Movimiento Ciudadano.

a) El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/UTF/DRN/16694/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Movimiento Ciudadano, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

b) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.

Notificación al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda otrora candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León.

a) El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital y/o Local de Nuevo León a efecto de que notificara al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

b) El veintidós de agosto de dos mil veintidós, mediante el oficio INE/VE/JLE/NL/1277/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la apertura de la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/P-COF-UTF/9/2022/NL.

c) A la fecha del presente no ha presentado Alegatos.

XIX. Cierre de instrucción. El siete de octubre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Una vez concluida la etapa de instrucción del presente procedimiento, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de fecha diez de octubre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, Dra. Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente, Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo en que se actúa, se determina lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de Fondo.

2.1 Objeto de estudio.

Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el sujeto obligado inobservó las obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes:

CONDUCTA	MARCO NORMATIVO APLICABLE
Ingreso no reportado	Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

SUJETOS OBLIGADOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN:	
Nombre:	C. Samuel Alejandro García Sepúlveda
Cargo contendido:	Gobernador
Entidad federativa:	Nuevo León.
Partido postulante:	Movimiento Ciudadano.

Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si las publicaciones realizadas por el C. Félix Arriata Cruz, en su perfil de la red social denominada Facebook, realizadas dentro del periodo de veda electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, constituyen un ingreso no reportado mediante una aportación a favor del entonces candidato a Gobernador de Nuevo León el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y del partido Movimiento Ciudadano.

Así, por conveniencia metodológica, se expondrán en primer término los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que se encuentra compelido el probable responsable, actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

2.2 Consideraciones preliminares.

Con antelación al estudio de las conductas sujetas a análisis por parte de esta autoridad electoral nacional, es de imperiosa necesidad establecer en el caso que nos ocupa, el vínculo entre el sujeto obligado y su realización.

Si bien es cierto, en el expediente que dio origen al presente procedimiento oficioso se declararon como inexistentes las conductas atribuidas al partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a Gobernador el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda por cuanto hace a la difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda electoral; también lo es que en la resolución PES-895/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, se determinó existente la infracción atribuida al C. Félix Arratia Cruz, por la difusión de propaganda electoral en época de veda electoral consistente en dos publicaciones en la red social Facebook las cuales tenían posicionamientos políticos en contra de las personas entonces candidatas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Morena; y, a favor

del otrora candidato a Gobernador de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido Movimiento Ciudadano.

En virtud de ello, esta autoridad electoral nacional tiene por acreditada la existencia de dos publicaciones que contenían propaganda electoral respecto de las personas candidatas a la Gubernatura de Nuevo León durante el periodo de veda electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Nuevo León, y bajo esa tesitura versará el análisis correspondiente, a fin de determinar, la configuración de una presunta violación a la normativa en materia de fiscalización.

2.3 Acreditación de los hechos.

A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.

A. Elementos de prueba recabados con motivo de la vista de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León.

Documental pública.

Consistente en el oficio SE/CEE/175/2022 de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León mediante el cual remite copia certificada de la Resolución dictada por el Tribunal Electoral de Nuevo León, dentro del procedimiento especial sancionador PES-895/2021, de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós.

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la sustanciación del procedimiento administrativo oficioso.

Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son los siguientes:

Documentales públicas.

I. Informe rendido por la empresa Meta Platforms, INC.

La empresa mencionada informó a esta autoridad electoral el costo de las publicaciones denunciadas así como de la hallada derivada de la sustanciación del procedimientos de mérito, las cuales fueron pagadas por el C. Félix Arratia Cruz en la red social denominada Facebook el día cuatro de junio de dos mil veintiuno.

II. Razón y constancia. En dichas documentales públicas se hizo constar lo siguiente:

- a) Verificación en la red social denominada Facebook de las publicaciones denunciadas y pagadas por el C. Félix Arratia Cruz.
- b) Verificación del correo electrónico y de la información remitida por la empresa Meta Platforms, INC., en relación con el costo de las publicaciones del C. Félix Arratia Cruz a través de la plataforma de Facebook.
- c) Verificación de la existencia de la publicación pautaada con el número de id. 3888582361254618 la cual guarda identidad con una de las publicaciones (id. 158182282949033) que forman parte de la vista que dio inicio al presente procedimiento.
- d) Verificación en el portal electrónico de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, sobre que el C. Félix Guadalupe Arratia Cruz tiene la calidad de representante suplente del partido Movimiento Ciudadano ante esa autoridad.

C. Valoración de las pruebas y conclusiones

Reglas de valoración

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados.

Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor **probatorio pleno**, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.

D. Conclusiones.

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del dato de prueba derivado, y al haber sido enunciadas las reglas de valoración aplicables, se exponen las conclusiones a las que arriba esta autoridad tras su valoración conjunta.

Publicación con identificador número 158182282949033

Se acreditó la existencia de una publicación realizada por el C. Félix Arratia Cruz en la que se aprecia un video donde el líder de FRENA habla sobre una de las elecciones más importantes del país, así como de todas las opciones a la Gubernatura de dicho estado, en donde recalca que entre todos los contendientes la mejor opción es el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Publicación con identificador número 3888582361254618

Se acreditó la existencia de una publicación que guarda identidad con la anteriormente descrita, la cual fue hallada durante la sustanciación del procedimiento de mérito. La publicación en comento, al igual que la anterior, fue realizada por el C. Félix Arratia Cruz y se aprecia un video en donde el líder de FRENA habla sobre una de las elecciones más importantes del país, así como de todas las opciones a la Gubernatura de dicho estado, en donde recalca que entre todos los contendientes la mejor opción es el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Publicación con identificador número 201279858523220

Se acreditó la existencia de una publicación realizada por el C. Félix Arratia Cruz en la que se aprecia un texto en el cual menciona que los ciudadanos deben tener conciencia y no dar ni un voto al Partido Revolucionario Institucional y su opción a la Gubernatura el C. Adrián de la Garza en el estado de Nuevo León, sin que se mencione al resto de los contendientes a la Gubernatura de Nuevo León.

Es importante hacer mención sobre que al únicamente realizar pronunciamientos en contra de uno solo de los contendientes al mismo cargo en el mismo estado, no genera un beneficio a alguna opción en particular, pues no se hace mención del resto de las personas candidatas contendientes.

Es por lo anterior que aun cuando se acreditó dicha publicación, no se advierte propaganda a favor del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda por lo cual no será materia de análisis del presente asunto.

2.4 Estudio relativo al ingreso no reportado.

A. Marco normativo

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; que se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes

(...)

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

En ese sentido, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar la totalidad de los ingresos, se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

B. Caso particular (Ingreso no reportado derivado de dos publicaciones en el perfil del C. Félix Arratia Cruz de la red social denominada Facebook.)

El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:

Como fue expuesto con anterioridad, el presente procedimiento derivó del oficio SE/CEE/175/2022 de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León mediante el cual remite la resolución al expediente PES-895/2021 del Tribunal Electoral del Estado

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

de Nuevo León, en la que resolvió como existente la infracción atribuida al C. Félix Arratia Cruz, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Ahora bien, de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León cabe destacar lo siguiente:

- Que el C. Félix Arratia Cruz reconoció el control, uso y manejo de su cuenta en la plataforma de Facebook.
- Se acreditó la existencia de la propaganda electoral denunciada y las características de difusión.
- Que la publicación materia del presente procedimiento consistió en un posicionamiento a favor del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda
- Que la propaganda electoral fue contratada y pagada por el C. Félix Arratia Cruz en su perfil de Facebook.
- Que el C. Félix Arratia Cruz tiene la calidad de Representante Suplente del partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Nuevo León.
- Que la propaganda electoral fue publicada y difundida el cuatro de junio de dos mil veintiuno, es decir en época de veda electoral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.

Bajo a esa tesitura, esta autoridad fiscalizadora tiene certeza de la existencia del pago por concepto de una publicación en el perfil del C. Félix Arratia Cruz en la red social denominada Facebook, la cual constituyó un beneficio en favor del entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda.

En este sentido, y por lo antes expuesto, esta autoridad aduce que la propaganda electoral vertida en el perfil del C. Félix Arratia Cruz en la red de social denominada Facebook, tuvo como objetivo producir un mayor impacto en la ciudadanía usando este canal de comunicación directa con el electorado, aunado a que derivado de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León se concluyó que dicha propaganda electoral fue contratada como publicidad en la plataforma mencionada.

Ahora bien, resulta necesario establecer la definición de propaganda electoral en la legislación, al respecto el artículo 242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, define lo siguiente:

“Artículo 242

(...)

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

(...)”

Debe considerarse como propaganda electoral todo acto de difusión que se realice en el marco de un proceso electoral. En el procedimiento de mérito la propaganda electoral en controversia hace referencia a la intención de promover ante la ciudadanía al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, mediante la publicación que lo señala, además de tener como objetivo principal llamar al voto.

Es decir, la publicación fue realizada con la intención de hacer llegar la propaganda aludida al electorado; y al mismo tiempo crear un posicionamiento y por ende, un beneficio al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, dejándolo ver como la mejor opción entre los contendientes, al exponer al resto de los candidatos al mismo cargo como opciones incorrectas, lo que influyó en la contienda electoral en aquella entidad.

Ahora bien, cabe mencionar que las redes sociales son un mecanismo de comunicación e información al alcance de la ciudadanía las cuales permiten opinar de manera personal e individual sobre diferentes temas públicos y políticos, dichas plataformas hacen llegar la información contenida en sus publicaciones a un mayor número de usuarios, por lo que tienen más influencia en la vida diaria de la sociedad y un impacto en la opinión pública.

Como ya se señaló, las plataformas digitales fueron creadas para dar a conocer de manera instantánea opiniones, puntos de vista y acceso a la información poniendo en función el derecho fundamental a la libre expresión dada su naturaleza al actuar espontáneo de los usuarios que en ellas interactúan.

Bajo ese contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció lo siguiente:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- *De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º y 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su puntos de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político. [...]”¹.*

La tesis anterior es importante en razón de que establece las particularidades de los mensajes en redes sociales desde la esfera de la libertad de expresión señalando que dicho actuar debe surgir desde la espontaneidad y libertad de cada ciudadano, es decir, no se puede dar este supuesto, si el emisor realiza las publicaciones o los mensajes en las redes sociales con el fin de influenciar al electorado o convencer a los usuarios de algún tema en particular, rebasando la simple opinión personal al convertir dichas publicaciones o expresiones en un beneficio en favor de una campaña electoral.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León acreditó la existencia de la propaganda electoral denunciada consistente en dos publicaciones,



¹ Quinta Época:

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-542/2015 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. —20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-16/2016 y acumulado. —Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otro. —Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. —20 de abril de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016. —Actor: Partido Revolucionario Institucional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Veracruz. —1 de junio de 2016. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanís Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

las cuales fueron pagadas por el C. Félix Arratia en su página de la red social Facebook, teniéndose como hecho reconocido que el uso y manejo de dicho perfil era utilizado por el referido ciudadano, por lo que en una de las publicaciones consistente en un video se desprende que se beneficia claramente al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, haciendo mención con palabras claras y directas sobre que era la mejor opción entre todos los contendientes a la gubernatura del estado de Nuevo León.

Ahora bien, derivado de la sustanciación del presente procedimiento se detectó que en el perfil del C. Félix Arratia existe una publicación diversa a las que dieron origen al presente procedimiento, pero que el video publicado guarda identidad con el contenido en la publicación anteriormente analizada, por lo que al contar con características idénticas se aduce que también causó un beneficio directo a los sujetos incoados.

Publicación que dio origen al procedimiento de mérito. Id. 158182282949033 https://www.facebook.com/ads/library/?id=158182282949033	Publicación hallada derivado de la sustanciación del procedimiento de mérito. Id. 3888582361254618 https://www.facebook.com/ads/library/?id=3888582361254618
	

En razón de lo anterior, se amplió el objeto de investigación, emplazando a los sujetos incoados y corriéndoles traslado de las constancias que obran en el expediente de mérito.

Asimismo, se realizó una solicitud de información a la persona moral Meta Platforms, INC, quien en respuesta preciso que las publicaciones fueron pagadas por el C. Félix Arratia Cruz y especificó el costo de cada una.

Por lo anterior, resulta evidente que las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook del C. Félix Arratia Cruz, Representante Suplente del partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, consistente en un video, no fueron realizadas de manera espontánea, personal y volátil desde su esfera individual como ciudadano, pues fueron contratadas y pagadas como publicidad en

la plataforma de Facebook para generar un beneficio al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, toda vez que dichas publicaciones contienen un video, cada una, en el cual el líder del movimiento “FRENA” sugiere no votar por las opciones de candidatos propuestas por los demás partidos políticos, expresando que la mejor opción era el abanderado por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que existió un beneficio a Samuel Alejandro García Sepúlveda, lo que se traduce en una aportación en especie.

En ese sentido, es importante analizar los supuestos que influyen para la identificación del beneficio en una campaña electoral, en relación con lo establecido por el artículo 32, numeral 1, inciso a), b) y d) del Reglamento de Fiscalización, el cual a la letra señala:

“Artículo 32

Criterios para la identificación del beneficio

1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:

a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos.

b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.


(...)

d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los servicios contratados o aportados para ese acto.

(...)”

De lo anterior podemos identificar que las publicaciones de mérito cumplen con el supuesto establecido por dicho artículo, como se indica a continuación:

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Identificador Único	Evidencia de la Publicación	Observaciones
158182282949033		<p>Podemos mencionar como características las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el título de la publicación de dicho video se aprecia el nombre escrito del Samuel Alejandro García Sepúlveda. Dentro de la descripción de la publicación se menciona que después de escuchar el video la ciudadanía, sabrá que la mejor opción para gobernar Nuevo León es el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda . Llama a votar a la ciudadanía por el

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

3888582361254618	 <p> Inactivo 4 jun 2021 - 5 jun 2021 Plataformas Categorías Tamaño de público estimado: >1 mill. personas Importe gastado (MXN): \$4.5 mil - \$5 mil Impresiones: 100 mil - 125 mil Identificador: 3888582361254618 Ver detalles del anuncio </p> <p> Félix Arratia Publicidad · Pagado por Félix Arratia GILBERTO LOZANO DICE: ADRIAN ES DEJAR ENTRAR A MORENA; LARRAZABAL TIENE CEREBRO CHIQUITO Y PREFIERO VOTAR POR UN PERRO ANTES QUE CLARA. LA OPCION ES SAMUEL. El líder de FRENDA habla de una de las elecciones más importantes del país. Escucha con atención lo que tiene que... </p> <p> LÍDER DE FRENDA HABLA DE LAS ELECCIONES DE NUEVO LEÓN ESCUCHA LO QUE TIENE QUE DECIR DE ADRIÁN Y DE SAMUEL </p>	<p>C. Samuel Alejandro García Sepúlveda de manera directa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con dicha publicación crea un posicionamiento a favor del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda como mejor opción al exponer las deficiencias de las demás opciones políticas. El ámbito geográfico donde se distribuyó y visualizó dicha publicación fue en el estado de Nuevo León.
------------------	---	--

Es así que el entonces candidato incoado obtuvo un beneficio de dichas publicaciones, pues del video y del contenido se puede identificar el nombre, el partido político que lo postuló y el llamado al voto, por lo que el sujeto incoado debió reportar dicho ingreso, recibido mediante la publicación realizada por el C. Félix Arriata Cruz en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en virtud de que fueron realizadas anterior a la jornada electoral, lo que pudo influenciar al electorado, lo cual se puede constatar en la información extraída de la propia red social:

Dónde se mostraron estos anuncios

Regiones en las que se encuentran las personas que vieron estos anuncios.



De la gráfica insertada, se puede observar que las publicaciones se visualizaron en un 100% por la ciudadanía del estado de Nuevo León, lo cual podría haber generado

una tendencia a favor del partido Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a Gobernador, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, dentro del territorio en donde se buscaba el voto.

Ahora bien, si bien es cierto no existió un consentimiento explícito por parte de los sujetos incoados por las publicaciones realizadas, también lo es que el C. Félix Arratia Cruz, al realizar dichas publicaciones, generó un beneficio a la campaña política del otrora candidato a la gubernatura de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, por el partido Movimiento Ciudadano, al haber emitido propaganda electoral en su favor, por lo que los sujetos incoados se encontraban obligados a realizar un escrito de deslinde que cumpliera con los elementos señalados en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, lo cual en la especie no aconteció.

Tal situación, es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa al no presentar un deslinde.

Sin embargo, al conocer la ley en la materia, debió haber llevado a cabo las acciones correspondientes para eximir la responsabilidad que en la presente resolución se acredita.

Aunado a lo anterior, es dable destacar que Félix Arratia tiene la calidad de representante suplente de Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, por lo que había un deber reforzado del partido de reportar el ingreso por las publicaciones de mérito, pues el ciudadano en comento trabaja, precisamente, para el partido político que benefició, por lo que tenían conocimiento de la existencia de los conceptos aquí analizados.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que las publicaciones realizadas por el C. Félix Arratia Cruz no fueron ejecutadas bajo el resguardo del derecho a la libertad de expresión, ya que

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

no actuó de manera espontánea y personal, pues pagó por las publicaciones en la red social Facebook.

- Que las publicaciones realizadas por el C. Félix Arratia Cruz en su perfil de Facebook constituyeron propaganda electoral, en razón de la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
- Que se generó un beneficio a la campaña del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, al mostrarlo como la mejor opción electoral.
- Que las publicaciones fueron visualizadas en un cien por ciento en el estado Nuevo León, por lo que pudo influir en la preferencia y voto de la ciudadanía.
- Que las publicaciones del C. Félix Arratia Cruz, Representante Suplente del partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, al beneficiar al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y al partido Movimiento Ciudadano, se consideraron una aportación.
- Que los sujetos incoados tenían conocimiento de la ley en la materia, la cual estipula que de no reconocer alguna propaganda electoral que les beneficie, deberán presente un escrito de deslinde ante esta autoridad electoral. Sin embargo, no lo llevaron a cabo.
- Que al generar un beneficio las publicaciones de mérito en la campaña electoral incoada, el ingreso debió ser reportado en la contabilidad correspondiente en la plataforma del Sistema Integral de Fiscalización.
- Que al no existir el reporte correspondiente, se actualiza la conducta consistente en un ingreso no reportado.

En consecuencia, este Consejo General concluye que las dos publicaciones de mérito que contienen propaganda electoral en la plataforma de Facebook, realizada por el C. Félix Arratia Cruz, Representante Suplente del partido Movimiento Ciudadano ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, fue una aportación al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda entonces candidato a la Gubernatura por dicho partido, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León, la cual no fue debidamente reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que los sujetos obligados incumplieron con la normatividad

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL


electoral al no atender lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, se declara **fundado**, el presente apartado.

- **Determinación del monto involucrado**

Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto denunciado se procede a determinar el valor de la aportación. Al respecto el Reglamento de Fiscalización en su artículo 26 preceptúa el procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida.

En este orden de ideas se solicitó a la empresa Meta Platforms, INC que informara el precio unitario a que ascendió el concepto de las dos publicaciones contratadas por el C. Félix Arratia Cruz tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades del tipo publicidad.

Ahora bien, el veintitrés de marzo y tres de agosto del año corriente dicha empresa dio respuesta por cuanto hace a las publicaciones denunciadas, en ese sentido con la información recibida se procede a sacar el costo unitario:

Identificador único de anuncio	Evidencia	Monto involucrado
158182282949033		\$6,221.26

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Identificador único de anuncio	Evidencia	Monto involucrado
3888582361254618	<div> <div> <p>Información sobre el anuncio</p> <p>Félix Arriola</p> <p>Publicidad · Pospaid por Félix Arriola</p> <p>Identificador: 3888582361254618</p> <p>ELBERTO LOZANO DICE: ADRIAN ES DEJAR ENTRAR A MORENA, LARAZABAL TIENE CEREBRO CHQUITO Y PREFIERO VOTAR POR UN PERRO ANTES QUE CLARA. LA OPCIÓN ES SAMUEL.</p> <p>El líder de FRENA habla de una de las elecciones más importantes del país. Escucha con atención lo que tiene que decir de cada uno de los...</p> <p>LÍDER DE FRENA HABLA DE LAS ELECCIONES DE NUEVO LEÓN</p> <p>ESCUCHA LO QUE TIENE QUE DECIR DE ADRIAN Y DE SAMUEL</p> </div> <div> <p>Datos del anuncio</p> <p>Inactivo</p> <p>4 jun 2021 - 5 jun 2021</p> <p>Identificador: 3888582361254618</p> <p>vt</p> <p>Tamaño de público estimado</p> <p>La métrica tamaño de público estimado generalmente estima cuántas personas coinciden con los criterios de segmentación y selección de anuncios que los anunciantes seleccionan cuando crean un anuncio. Ver más</p> <p>Tamaño de público estimado</p> <p>>1 mill. personas</p> <p>Importe gastado</p> <p>Cantidad total estimada de dinero que se gastó en un anuncio durante su calendario. Más información</p> <p>Importe gastado</p> <p>\$4.5 mil - \$5 mil (MXN)</p> <p>Impresiones</p> <p>Número de veces que se vio un anuncio en pantalla. Puede incluir varias visualizaciones por parte de las mismas personas. Más información</p> <p>Impresiones</p> <p>100 mil - 125 mil</p> <p>A quién se mostró este anuncio</p> <p>Desglose por edad y sexo de las personas que vieron este anuncio.</p> </div> </div>	\$4,720.86
Total		\$10,942.12

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los hechos que se investigan, de manera específica el monto por las publicaciones señaladas es de **\$10,942.12 (diez mil novecientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.)** por lo que esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.

Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos.

Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se justifica el quantum de la sanción a imponer.

C. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de reportar el ingreso por concepto de dos publicaciones pautadas en el perfil de la red social “Facebook” del C. Félix Arratia Cruz, elementos que no fueron localizados en la contabilidad de los sujetos denunciados, es decir del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y del partido Movimiento Ciudadano.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y

es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación **SUP-RAP-153/2016** y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar

la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUPRAP018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido Movimiento Ciudadano, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora por la omisión de reportar el ingreso, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

D. Individualización de la sanción.

Ahora bien, toda vez que se ha analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se individualiza la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se atenderá el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta
- d) La trascendencia de las normas transgredidas
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado **conducta infractora** localizado en el siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión² de reportar el ingreso por concepto de aportación den especie por dos publicaciones pautadas en la red social Facebook, atentando a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

² Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron

El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la conducta que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el presente procedimiento oficioso.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar la totalidad de los ingresos, se vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización ³.

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe.

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su

³ “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. (...)”

empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los

partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁴

⁴ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

A continuación, se establece la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

En esta tesitura, debe considerarse que el partido **Movimiento Ciudadano**, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CEE-CG-02/2022, emitido por Comisión Estatal Electoral Nuevo León, en sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campañas de los partidos políticos para el ejercicio 2022.

Asignándosele como financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio 2022, los siguientes montos:

Partido	Financiamiento público para actividades ordinarias 2022
Movimiento Ciudadano	\$59,091,663.62

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral.

Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En este sentido, es importante mencionar que el partido Movimiento Ciudadano no cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, por lo que, la sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

- Que el monto involucrado por las publicaciones pagadas en Facebook asciende a **\$10,942.12 (diez mil novecientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.)**

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$10,942.12 (diez mil novecientos cuarenta y dos pesos 12/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$16,413.18 (dieciséis mil cuatrocientos trece pesos 18/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido **Movimiento Ciudadano**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$16,413.18 (dieciséis mil cuatrocientos trece pesos 18/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2.5 Rebase del tope de gastos de campaña.

Una vez determinado el monto al que asciende la irregularidad de la especie *ingreso no reportado*, la cantidad involucrada correlativa, se advierte:

Candidata	Cargo	Postulada por el partido	Monto susceptible de sumatoria
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda	Gobernador de Nuevo León	Movimiento Ciudadano	\$10,942.12

Asimismo, se tiene acreditado en el presente expediente, lo siguiente:

Candidato	Gastos reportados Dictaminados	Gastos no reportados Dictaminados	Gastos quejas (firmes)	Suma	Gastos a acumular en la presente Resolución	Total de gastos	Tope de gastos de campaña	Monto diferencia	Porcentaje diferencia
	A	B	C	D=A+B+C	E	F=D+E	G	H=G-F	I=H/G*100
Samuel Alejandro García Sepúlveda	\$42,252,801.09	\$597,536.32	\$786,080.00	\$43,636,417.41	\$10,942.12	\$43,647,359.53	\$72,086,341.30	\$28,438,981.77	39.4%

De lo anterior se desprende que la diferencia entre el total de gastos atribuibles a la candidatura y el tope de gastos de campaña asciende a 39.4%. Por tanto, no se actualiza la figura de rebase de tope de gastos de campaña.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano respecto de su otrora candidato a Gobernador de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en los términos del **Considerando 2.4, B.**

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el **Considerando 2.4, C**, se impone al partido Movimiento Ciudadano **una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$16,413.18 (dieciséis mil cuatrocientos trece pesos 18/100 M.N.).**

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se modifica. De conformidad con lo expuesto en el Considerando **2.5** de la presente Resolución.

CUARTO. Notifíquese de manera personal al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano.

QUINTO. Hágase del conocimiento al Consejo Estatal Electoral Nuevo León, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. INE/P-COF-UTF/9/2022/NL

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**